

En la sesión extraordinaria efectuada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo recaído a las consultas formuladas por el licenciado Guillermo Galván González, Secretario del Ayuntamiento de Valle de Santiago, relativas a la ejecución de obras públicas y a la realización del evento denominado «Enlace Laboral Valle de Santiago 2021», durante las campañas electorales.

ANTECEDENTES

Aprobación y ajustes del plan integral y calendario

I. En la sesión extraordinaria efectuada el seis de julio de dos mil veinte, este Consejo General, mediante el acuerdo CGIEEG/021/2020, aprobó el plan integral y calendario del proceso electoral local ordinario 2020-2021.

En sesión ordinaria efectuada el veintiocho de agosto de dos mil veinte, mediante el acuerdo CGIEEG/037/2020 se modificó el plan integral y calendario del proceso electoral local ordinario 2020-2021 y se ajustaron diversos plazos.

En la sesión ordinaria efectuada el treinta de octubre de dos mil veinte, mediante el acuerdo CGIEEG/075/2020 se modificó el calendario del proceso electoral local ordinario 2020-2021 y se establecieron los requisitos de las comunicaciones de los partidos políticos sobre sus procesos internos de selección de candidaturas.

Posteriormente, en la sesión extraordinaria celebrada el seis de enero de dos mil veintiuno, se aprobó el acuerdo CGIEEG/004/2021, mediante el cual se modificó el plan integral y calendario del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Conforme a dicho acuerdo, los periodos de campaña para los cargos correspondientes a integrantes de ayuntamientos y diputaciones locales son los siguientes:

| Tipo de elección | Fecha de inicio | Fecha de término |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Ayuntamientos | 5 de abril de 2021 | 2 de junio de 2021 |
| Diputaciones | 20 de abril de 2021 | 2 de junio de 2021 |

Aprobación del Reglamento de Campañas

II. En la sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, este Consejo General emitió el acuerdo CGIEEG/087/2021, mediante el cual se aprobó el *Reglamento de Campañas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021*.

Consultas del Secretario del Ayuntamiento de Valle de Santiago

III. El once de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron en la Oficialía de Partes de este Instituto los oficios SHAVS/368/2021 y SHAVS/357/2021, suscritos por el licenciado Guillermo Galván González, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento de Valle de Santiago, mediante los cuales realiza dos consultas a este Consejo General.

En el primer oficio, la materia de la consulta versa en los términos siguientes:

«El Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, tiene la intención de realizar un evento denominado <<ENLACE LABORAL VALLE DE SANTIAGO 2021>>, el próximo 21 de mayo del presente año; el cual se organiza en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato a través de la Coordinación de Empleo Salamanca y la Dirección de Desarrollo Económico de Valle de Valle de Santiago, Gto. [sic]

Cabe hacer mención que el evento será masivo, presencial y controlado mediante previa cita, se pretende reunir a 10 empresas del corredor industrial del Estado de Guanajuato, y atendiendo un número aproximado de 450 buscadores de empleo para una entrevista directa.

[...]

Y dado que actualmente nos encontramos en campaña electoral, me permito hacer la siguiente consulta:

PRIMERO. A la luz de los principios que rigen la aplicación de los recursos públicos consagrados en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, puede ejecutar dicho EVENTO.

SEGUNDO. En caso de ser afirmativa la consulta anterior, cuáles serían las limitaciones para la realización del EVENTO durante el periodo de campaña electoral.»

En el segundo oficio, la materia de la consulta versa en los términos siguientes:

«El Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, tiene la intención de celebrar un *CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA* con el ejecutivo del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad.

Lo anterior, derivado de que el Gobierno del Estado de Guanajuato recibió de Petróleos Mexicanos, una donación en especie consistente en toneladas de asfalto para ser destinadas a: *“Con el asfalto, apoyar los programas y obras de rehabilitación de calles, caminos y vialidades del Estado y sus municipios”*.

Por lo que dicho convenio tiene por objeto establecer los mecanismos de colaboración y coordinación administrativa entre la Secretaría y el Municipio, para que este último lleve a cabo la aplicación de producto asfáltico donado en la vialidad, camino o calle según se determine, obligándose además a disponer y erogar los recursos que se requiera, lo que se especifica y describe en los anexos técnicos de ejecución que se generaran a partir de la firma del convenio.

Y dado que actualmente nos encontramos en campaña electoral, me permito hacer la siguiente consulta:

PRIMERO. A la luz de los principios que rigen la aplicación de los recursos públicos consagrados en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, puede ejecutar dicho programa.

SEGUNDO. En caso de ser afirmativa la consulta anterior, cuáles serían las limitaciones para la ejecución del programa en durante el periodo de campaña electoral.»

CONSIDERANDO

Personalidad jurídica del Instituto y principios que rigen su actuación

1. El artículo 77, párrafos primero y segundo, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, establece que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato* y la propia *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*. De igual manera, señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia electoral, en los términos que establecen los ordenamientos jurídicos antes citados y la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*.

Órgano superior de dirección

2. El artículo 81 de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

Integración del Consejo General

3. El artículo 82, párrafo primero, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, indica que el Consejo General se integra por un consejero presidente y seis consejeras y consejeros electorales, con derecho a voz y voto; la Secretaría Ejecutiva y representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.

Atribución del Consejo General para desahogar consultas

4. De conformidad con el artículo 92, fracción XXVI, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, es atribución del Consejo General desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e interpretación de dicho ordenamiento legal.

Respuesta a las consultas

5. Para dar respuesta a las consultas realizadas por el Secretario del Ayuntamiento de Valle de Santiago, referidas en el antecedente **III**, se identifica que ambas versan sobre la posibilidad de realizar diversas actividades por parte del Ayuntamiento de dicho municipio.

Específicamente, en el caso de la primer consulta, se trata de la posibilidad de llevar a cabo un evento denominado «Enlace Laboral Valle de Santiago 2021» el próximo veintiuno de mayo del presente año, evento de realización masiva, presencial y controlado mediante previa cita, cuya organización se llevará a cabo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato, con el que se pretende reunir a diez empresas del corredor industrial de la entidad y atender a un número aproximado de cuatrocientos cincuenta personas.

En el caso de la segunda consulta, se refiere a la posibilidad de celebrar un convenio de colaboración y coordinación administrativa con el Ejecutivo del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, derivado de la donación en especie consistente en asfalto, que realizó la paraestatal Petróleos Mexicanos al Gobierno del Estado de Guanajuato, con el objetivo de establecer los mecanismos de colaboración y coordinación para que el municipio de Valle de Santiago lleve a cabo la aplicación de asfalto donado en vialidades, caminos o calles.

Primeramente, es necesario precisar que el artículo 41, base III, apartado C, segundo párrafo, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Por su parte, el artículo 134, párrafo octavo, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier

otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidora o servidor público.

Las reglas anteriores se reiteran, en los artículos 17, apartado C, y 122 de la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato*, así como en los artículos 203 y 350, fracciones II y IV, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*.

Además, el artículo 8, fracciones III y VII de la *Ley General de Comunicación Social*, señala que las campañas de comunicación social deberán informar a la ciudadanía de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados, y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos, así como comunicar programas y actuaciones públicas.

Por otra parte, el artículo 9, fracción I de dicha ley, indica que, además de lo previsto en el artículo 21 de esa misma, no se podrán difundir campañas de comunicación social cuyos contenidos tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en su artículo 14.

En ese sentido, el artículo 21 de la ley en comento, establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en medios de comunicación, precisando que en el caso de los procesos electorales locales, deberá suspenderse la difusión de campañas de comunicación social en los medios de comunicación con cobertura geográfica y ubicación exclusivamente en la entidad federativa de que se trate.

Conforme a dicha disposición legal, se exceptúan de lo anterior las campañas de información de las autoridades electorales; las relativas a servicios educativos y de salud; las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; y cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de manera específica durante los procesos electorales, sin que ello implique que sólo las campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que podrían difundirse. Cuando existan procesos electorales, las dependencias y entidades de la administración pública deben acatar la normatividad aplicable que ordene la suspensión de las campañas gubernamentales.

Por otra parte, en la resolución del recurso de apelación SUP-RAP-119/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que por propaganda gubernamental debe entenderse el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo las servidoras y servidores públicos y las entidades públicas, cuando tengan como finalidad difundir, para el conocimiento de la ciudadanía, la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno, con el objeto de conseguir su aceptación.

En dicha resolución, se puntualizó que para estar en presencia de propaganda gubernamental se requiere la actualización de los siguientes elementos:

- a)** La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública;
- b)** Que éste se dé mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones;
- c)** Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno; y,
- d)** Que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la ciudadanía.

Asimismo, al resolver el recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-474/2011, se precisó por parte de la Sala Superior, que la prohibición relativa a la difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales tiene como finalidad evitar que se pueda influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, a favor o en contra de determinado partido político, candidata o candidato.

Aunado a ello, en la jurisprudencia 18/2011 de rubro: «PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.»¹, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que la restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea en pro o en contra de determinado partido político o candidato, atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las campañas

¹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 35 y 36.

de información, servicios educativos, de salud y las de protección civil en caso de emergencia, deberán colmar los mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia.

Con base en el marco jurídico señalado, se procederá a analizar cada una de las consultas expuestas en los oficios que nos ocupan, de la manera siguiente:

a) Realización del evento denominado «Enlace Laboral Valle de Santiago 2021».

Al respecto, debe señalarse que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que durante las campañas electorales no deben suspenderse las actividades que, conforme al marco normativo aplicable, corresponden a las personas servidoras públicas, tal como se advierte de la sentencia del juicio de revisión constitucional con número de expediente SUP-JRC-89/2018, que, en lo conducente, es del tenor literal siguiente:

«De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar que lo que se persigue no tiene por objeto impedir que los servidores públicos lleven a cabo los actos que por su propia naturaleza deben efectuar en los diferentes órdenes de gobierno y menos prohibir que ejerzan sus atribuciones en la demarcación territorial que corresponda, pues ello podría atentar contra el desarrollo y correcto desenvolvimiento de la función pública que están obligados a cumplir en beneficio de la población, ya que no resulta razonable que se paralicen las actividades que el gobierno implementa en beneficio de la sociedad.»

Asimismo, lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 38/2013 de rubro: «SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.»², en el sentido de que los mandatos previstos con la finalidad de respetar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda no pretenden limitar, en detrimento de la función pública, las actividades que son encomendadas a las personas servidoras públicas.

² Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 75 y 76.

Sin embargo, de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 134 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, las personas servidoras públicas deben observar el principio de imparcialidad, el cual implica el deber de evitar utilizar con parcialidad los recursos públicos que tengan bajo su responsabilidad, pero también que no deben influir, de cualquier forma, en la equidad de la contienda electoral. El principio de imparcialidad se traduce en la exigencia de observar una conducta neutral de las personas servidoras públicas ante los procesos electorales, por lo que deben evitar cualquier acción u omisión que pretenda influir en el resultado de la elección; criterio sostenido en la tesis V/2016 de rubro: «PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE COLIMA)».³

En otras palabras, tal como dispone la tesis citada, el poder público no debe emplearse para influir en el electorado, por lo que durante los procesos electorales, especialmente en los periodos de campaña y veda electoral, la referida disposición constitucional tiene por objeto proteger: «[...] la imparcialidad, la igualdad en el acceso a cargos públicos y la equidad, así como inhibir o desalentar toda influencia que incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato o que distorsione las condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación social, alterando la igualdad de oportunidades entre los contendientes».

Conforme a ello, las personas servidoras públicas, al organizar o participar en actos o eventos con motivo del ejercicio de sus facultades, deben cuidar que no tenga carácter proselitista ni se promocióne la imagen de alguna persona servidora pública o a la administración pública en turno; tampoco podrán llevarse a cabo acciones que tengan por objeto obtener la aprobación, consenso o apoyo de la ciudadanía respecto a la actuación de las personas servidoras públicas o de una administración.

El mandato constitucional de previa alusión también implica la exigencia de que no se utilicen recursos públicos para fines distintos al legalmente previsto ni las personas servidoras públicas aprovechen la posición en que se encuentran para que, de manera explícita o implícita, hagan promoción para sí o de un tercero que pueda afectar la contienda electoral.

³ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 108, 109 y 110.

Por ende, durante dichos actos o eventos y con motivo de los mismos no podrá difundirse ni hacerse alusión a programas, logos, acrónimos, siglas o cualquier elemento que identifique a la administración municipal u otro ente de gobierno, así como tampoco logros, obras, acciones o compromisos cumplidos. En suma, tendrá que evitarse cualquier acción que pueda influir, en modo alguno, en el voto de la ciudadanía o en la equidad de la contienda electoral, a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidatura.

Además, en la resolución INE/CG695/2020 aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la sesión extraordinaria de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se ejerció la facultad de atracción para fijar mecanismos y criterios sobre la aplicación de programas sociales conforme a los principios de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y equidad en la contienda en los procesos electorales federal y locales 2020-2021, se estableció que si bien, durante las campañas electorales, no está legalmente prevista la suspensión de programas sociales o cualquier otro mecanismo que implique la entrega de bienes o servicios a la población, su realización está sujeta a diversas limitantes que deben ser observadas.

Sobre todo, con base en la jurisprudencia 19/2019 de rubro: «PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL», conforme a la cual los beneficios de los programas sociales no deben entregarse en eventos masivos o en modalidades que afecten la equidad en la contienda electoral. Lo que en términos de la resolución INE/CG695/2020, resulta aplicable a cualquier mecanismo que implique la entrega de bienes o la prestación de servicios a la población.

De manera que también debe cuidarse la modalidad de la celebración de los actos o eventos que las personas servidoras públicas lleven a cabo o en los que intervengan durante las campañas electorales, a fin de que no se afecte, en modo alguno, la equidad en la contienda.

Por otra parte, en cuanto a la difusión del evento sobre el cual versa la consulta que nos ocupa, se advierte que no encuadra en alguna de las excepciones a la obligación consistente en la suspensión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales, pues tal difusión no tendría por objeto informar a la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones legales (lo que podría considerarse como difusión con fines educativos), no se comunicarían situaciones concretas

relacionadas con la salud de las personas (difusión con fines de salud pública) y no tendría por objeto prevenir de algún riesgo a la población (difusión con fines de protección civil en casos de emergencia).

b) Celebración de un convenio de colaboración y coordinación administrativa con la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad para que el municipio de Valle de Santiago lleve a cabo la aplicación de asfalto en vialidades, caminos o calles.

En cuanto a ello, como se mencionó anteriormente, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que durante las campañas electorales no existe obligación de suspender las actividades que los distintos órdenes de gobierno realizan en beneficio de la sociedad. Empero, como también se asentó en este considerando, en la resolución INE/CG695/2020 se estableció que los mecanismos que impliquen la entrega de bienes o la prestación de servicios a la población no deben ejecutarse en modalidades que afecten la equidad en la contienda.

Por lo tanto, con base en las disposiciones jurídicas invocadas en este considerando, no será posible difundir las actividades en comento durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, en virtud de que tal difusión no encuadra en alguno de los supuestos de excepción a la obligación consistente en suspender la propaganda gubernamental que se actualizan en aquellos casos en que tenga únicamente fines educativos, de salud o protección civil en casos de emergencia.

Con base en lo anterior, no podrá difundirse ni fijarse en los lugares de ejecución de las obras públicas elemento alguno que publicite que las mismas se llevan a cabo con base en el convenio referido por la autoridad que realiza la consulta que nos ocupa ni que contenga alusión alguna a la administración pública municipal en turno o a cualquier otro orden de gobierno, tampoco podrá realizarse la difusión de beneficios, programas, acciones o logros de gobierno; logos, emblemas, acrónimos que identifiquen a una administración, campaña institucional, programa público o acto gubernamental; no podrá difundirse propaganda que contenga frases, imágenes, voces o símbolos que puedan ser constitutivos de propaganda gubernamental, política o electoral ni elementos tendientes a la promoción personalizada de cualquier servidora o servidor público, partido político, coalición, candidata o candidato.

Por los motivos antes expuestos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, párrafo segundo, y 31, párrafo segundo de la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato*; 4, 77, párrafos primero y segundo, 81, 82, párrafo primero, 92 fracción XXVI, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. En los términos contenidos en el considerando **5** del presente acuerdo, se da respuesta a las consultas formuladas por el licenciado Guillermo Galván González, Secretario del Ayuntamiento de Valle de Santiago.

SEGUNDO. Con copia de este acuerdo notifíquese al licenciado Guillermo Galván González, Secretario del Ayuntamiento de Valle de Santiago, en su domicilio oficial.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva que comuniqué este acuerdo, mediante correo electrónico, al consejo municipal electoral de Valle de Santiago, así como al consejo distrital electoral XIX con sede en dicho municipio.

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, firman este acuerdo el Presidente del Consejo General y la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.